

empatia

Reportes de política pública

Chile



empatia.la

Escrito por: Paz Peña

Edición: Ana Jemio

Coordinación y comentarios: Maia Levy Daniel

Diseño y diagramación: Ápice Estudio

Licencia Internacional Pública de Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados
4.0 de Creative Commons



Este proyecto tiene como objetivo resolver problemas públicos en la región América Latina y Caribe (LAC por sus siglas en inglés) el marco del proyecto global Artificial Intelligence for Development (AI4D) del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC por sus siglas en inglés). Este proyecto es dirigido por ILDA y Centro Latam Digital.

Chile¹

Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial en Chile. Desafíos entre la contingencia, la participación y la incertidumbre

1. Resumen ejecutivo

En este reporte, se analiza el proceso que llevó a cabo el gobierno chileno de Sebastián Piñera para acordar una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. El proceso, que tuvo una amplia flexibilidad para responder a contingencias históricas en el país (una revuelta social que abrió un ciclo constituyente y una pandemia que forzó la virtualización para evitar los contagios), termina con un diseño de participación ciudadana que, no obstante ser valorado, cuenta con diversos cuestionamientos por los distintos actores interesados. El documento examina esos desafíos y levanta recomendaciones de política pública, que pueden ser una guía para tomadores de decisiones que buscan políticas de consenso para encarar los desafíos del desarrollo de la Inteligencia Artificial en los países.

2. Introducción

Este reporte analiza el proceso de desarrollo de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial en Chile. Estudiar este proceso, marcado por la contingencia política y sanitaria, puede ser interesante tanto para tomadores de decisiones extranjeros como locales, pues fue desarrollado en un punto de inflexión histórica -que se puede considerar local pero que también responde a una demanda al menos regional- en el que la ciudadanía exige mejores mecanismos de participación y representatividad en la política pública.

Los resultados están estructurados en este reporte de la siguiente manera. Primero, se describe brevemente la metodología y las fuentes que alimentaron este informe. Segundo, se da cuenta del contexto que llevó al gobierno de Chile a decidirse por levantar una estrategia de Inteligencia Artificial (IA). En tercer lugar, se describe el diseño del proceso de participación para esta estrategia y se da cuenta de los resultados conocidos hasta el término de esta investigación. Luego, en base a las entrevistas hechas en esta

¹ Este es un documento de trabajo, que podría ser profundizado en un artículo académico posterior y no refleja las opiniones de ILDA y Centro Latam Digital.

investigación, se analizan los puntos críticos del proceso para después dar lugar a las conclusiones y las recomendaciones.

3. Nota metodológica

Para levantar la información y estructurar el análisis, esta investigación consultó documentación y bibliografía relevante sobre la iniciativa y se hicieron entrevistas a diversos actores participantes del proceso, tanto del sector privado, la sociedad civil, la academia y también del gobierno, a través de cuestionarios semiestructurados, que fueron desplegados en entrevistas online y correo electrónico.

La lista de personas entrevistadas incluyó a las siguientes personas. Por Minciencias: Demián Arancibia (asesor) y José Antonio Guridi (ex coordinador del Plan de Trabajo para la creación de la Política y el Plan de Acción de Inteligencia Artificial). Núcleo Inteligencia Artificial y Sociedad del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile: Ana María Castillo y Lionel Brossi (directores). EY Chile: Patricio Cofre (socio de consultoría en datos, analítica e Inteligencia Artificial). Observatorio Público para la Transparencia e Inclusión Algorítmica (OPTIA): Danielle Zaror, Claudia Negri, Catherine Muñoz, Carol Hullin, Luis Pizarro, Oscar López, Ricardo Baeza-Yates, Daniel Vak Contreras y Alejandro Barros (directores). Derechos Digitales: Juan Carlos Lara (director de investigación y políticas públicas) y Patricio Velasco (investigador).

4. Contexto: institucionalidad y actores relevantes

La necesidad de plantear una estrategia para enfrentar los desafíos que representa la Inteligencia Artificial en múltiples dimensiones en Chile responde, más que al impulso de un gobierno de turno, a una institucionalidad que ha mirado con especial interés las posibilidades potenciales de estas nuevas tecnologías para el país.

Por ejemplo, el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo² ya informaba la necesidad de diseñar una estrategia nacional de IA (CNID, 2019), así como la Comisión Desafíos del Futuro del Senado y representantes de la Academia Chilena con su documento

² Organismo público-privado con misión de asesorar a la Presidencia de la República en la identificación, formulación y ejecución de políticas y acciones que fortalezcan la innovación, la competitividad y el desarrollo en Chile.

"Inteligencia Artificial para Chile: la urgencia de desarrollar una estrategia" (Comisión Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019). Además, en 2019, como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Chile adhirió a las recomendaciones de su Consejo de IA, entre las cuales se incluye la creación de un entorno político propicio para la IA (OECD, 2019).

Igualmente, en Chile, existen actores provenientes de múltiples partes interesadas, muy activos en los desafíos que plantea la Inteligencia Artificial para el país. En particular, la academia ha sido un protagonista relevante debido a los diversos núcleos de investigación, transversales en sus disciplinas, sobre temas relacionados al Big Data y la Inteligencia Artificial. Los temas de interés son amplios: los efectos sociales y políticos de los datos, el uso de metodologías innovadoras desde la ciencia de datos para mejorar la calidad de vida de las personas, los estándares éticos y legales de las tecnologías algorítmicas y la gobernanza de la IA en distintos espacios sociales, entre otros.³

Por su parte, hay organizaciones de la sociedad civil que tienen una trayectoria importante en tecnologías, democracia y derechos humanos y que han incorporado en su agenda los desafíos de la Inteligencia Artificial. Entre los temas más coincidentes en las agendas de estas organizaciones están las oportunidades de estas tecnologías para fortalecer o ser un detrimento para las democracias, las potenciales violaciones de derechos humanos con el uso de estas tecnologías, el incremento de la discriminación hacia grupos históricamente vulnerables y cómo los aspectos regulatorios pueden jugar un rol para proteger los derechos de las personas.⁴

El sector privado también es activo en sus preocupaciones por la IA, aunque los énfasis en los intereses varían dependiendo de su sector (empresas que desarrollan tecnología o empresas que usan tecnología en sus procesos productivos) y de su tamaño (transnacionales o pymes). Con todo, parte clave de sus intereses es cómo la IA permite acelerar el crecimiento económico de Chile, siendo aspectos de particular preocupación la creación de infraestructura y de estrategias de desarrollo productivo, así como la inversión en capital humano.

Con respecto al Estado, en la actualidad, variados ministerios ya han adaptado muchos de sus procesos a la intervención de la Inteligencia Artificial (Yáñez, 2019) y muchas de estas iniciativas estatales han sido adaptadas sin una discusión social ampliada (León, 2019).

³ Algunos centros de investigación en Chile son: el Instituto Milenio Fundamentos de los Datos (IMFD), IA Lab, Gob_Lab UAI, Inteligencia Artificial y Derecho, el Núcleo Inteligencia Artificial y Sociedad, Laboratorio Digital, entre otros tantos.

⁴ Entre otras, destacan organizaciones como Derechos Digitales, Ciudadanía Inteligente, Fundación Datos Protegidos y el Observatorio Público para la Transparencia e Inclusión Algorítmica.

5. Hacia una estrategia nacional de IA: proceso y resultados

Desde el ejecutivo, el impulso inicial para plantear una estrategia nacional nace de la Unidad de Economía del Futuro (en adelante, UEF) del ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que decide explorar las posibilidades económicas para Chile de las tecnologías emergentes como es la Inteligencia Artificial. Luego, la unidad es trasladada al Minciencias y, desde allí, asume el liderazgo del proyecto y el diseño de la estrategia.

Así, desde principios de 2019, la UEF del entonces Ministerio de Economía, tuvo el encargo de hacer un benchmark sobre qué estaban haciendo los distintos países en la materia. Finalizado este proceso, el presidente Piñera anunció que el gobierno puso en marcha un plan de trabajo para diseñar esta estrategia encomendado al Minciencias, junto a representantes del ministerio de Economía, Fomento y Turismo, del ministerio de Desarrollo Social, del ministerio del Trabajo, del ministerio de Educación, del ministerio Secretaría General de la Presidencia, y de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Gob.cl, 2019).

El caso chileno es muy interesante en cuanto a diseño de política pública porque fue un proceso que tuvo que cambiar en el tiempo. Primero, debido a una fuerte crisis política en el país, que nace de una revuelta social en octubre de 2019 y en la que se expresa un alto rechazo a las políticas neoliberales y las elites de la clase política (Sanhueza, 2019), lo que termina afectando la popularidad del gobierno de Sebastián Piñera (García, 2021). En segundo lugar, por el enfrentamiento de la pandemia COVID-19, que se superpone a la crisis política e implica la urgencia de virtualizar los procesos.

Así, el proceso terminó siendo más abierto y participativo que lo originalmente planeado. Se pueden identificar cuatro diseños para la ejecución de la estrategia.

a. El diseño original: diseño con mesas de trabajo y validación abierta

De acuerdo al entonces coordinador de la estrategia, José Antonio Guridi, primero se diseñó un modelo de política pública más “tradicional”: trabajar con un comité interministerial muy amplio, que diseñaría las propuestas iniciales. Estas serían discutidas por mesas de trabajo constituidas por actores diversos y, a partir de eso, se generaría un borrador para someterlo a una consulta pública.

b. El diseño acordado: diseño de expertos con validación abierta

De acuerdo con Guridi, una vez discutido el diseño original con el presidente del gobierno, se optó por un modelo aún más tradicional: se desecharon las mesas de trabajo y se convocó a un comité de expertos, que debería trabajar un borrador que luego se sometería a una consulta pública. A esto, se le agregarían seminarios regionales no vinculantes.

c. El diseño implementado: modelo de participación tutelada de múltiples partes interesadas

Debido a la revuelta social que estalló en pleno inicio del proceso, el gobierno bajó las resistencias a mecanismos más participativos y la UEF pudo proponer un nuevo diseño que respondiera a las demandas transversales de involucramiento ciudadano. El diseño incluyó:

- El comité de expertos (que ya estaba trabajando en un borrador de la estrategia).
- Convertir seminarios en mesas de trabajo regionales y vinculantes.
- Mesas autoconvocadas vinculantes, en las que como único insumo se proporcionó un formulario de retorno de la discusión.
- Consulta pública final del borrador, a través de una plataforma online, con la metodología a cargo del gobierno.

d. El diseño modificado: la irrupción de la participación online

El proceso se vio nuevamente interrumpido debido a la pandemia y las restricciones impuestas por el confinamiento. Esto hizo extender los plazos y optar a que todas las mesas tuvieran formato online. Para facilitar el cambio, la UEF elaboró un manual de participación, con recomendaciones de plataformas y el paso a paso de cómo reportar los resultados. En paralelo, se organizaron por tres meses una serie de webinars semanales, con entre uno y tres invitados y con el objetivo de acercar la IA a la gente. El sistema de consulta pública se mantuvo.

La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial en Chile aún no está publicada oficialmente y se espera que sea liberada a finales del primer semestre de 2021. Con todo, es probable que la versión final de la política sea bastante cercana al último documento borrador de la estrategia, que ya fue sometido a la consulta pública y que se ordenó bajo tres ejes establecidos por el mismo gobierno:

- Factores habilitantes: son aquellos elementos necesarios para el desarrollo de la Inteligencia Artificial.
- Desarrollo de IA y sus aplicaciones: son los elementos propios de la investigación básica y aplicada en IA y el desarrollo y demanda de soluciones.
- Ética, aspectos regulatorios e impactos sociales y económicos: en este eje se consideran los desafíos éticos, regulatorios, económicos y sociales, que se desprenden del desarrollo y uso de IA, además de las oportunidades que emergen del buen uso de esta tecnología.

De acuerdo con el Mincienias, el plan de acción incluirá medidas concretas que se desarrollarán en el corto y mediano plazo, en el caso de las que pueden corresponder a proyectos de ley; otras serán de carácter administrativo, de formación de personas y capacidades de I+D o para el desarrollo territorial. Los presupuestos asociados dependerán de la naturaleza de cada una de estas iniciativas (Yáñez, 2019).

6. Análisis del proceso chileno

El proceso chileno tuvo desafíos enormes que planteó la contingencia política y sanitaria del país. Todos esos retos terminaron haciendo que el proceso se adaptara, lo que también marca su capacidad de reacción pero Para evitar la repetición de la palabra “también” en una sola oración releva algunos de sus puntos más criticados.

En un principio, el diseño estaba más bien en los ámbitos de información y consulta, con un fuerte énfasis en la participación experta más propia de lógicas tecnocráticas. Pero es la crisis política en Chile -que es también considerada una reacción en contra de las políticas hechas de la tecnocracia (Sanhueza, 2019)- la que termina por abrir más el proceso hacia una participación más activa de la ciudadanía.

De acuerdo con la OCDE (2003), hay tres niveles de involucramiento ciudadano en los procesos de política pública:

- Información, que implica una relación de sentido único, en la cual el gobierno genera información y la transmite a los ciudadanos.
- Consulta, que significa una relación de doble sentido, en la cual los ciudadanos comunican sus opiniones al gobierno.
- Participación activa, que significa una relación asociativa con el gobierno, en la cual los ciudadanos se implican activamente, aunque la responsabilidad de la decisión

final o la formulación de las políticas siga incumbiendo al gobierno.

De acuerdo a esta segmentación, podemos ver que el proceso de participación en la Estrategia Nacional de IA en Chile se mueve en las dos últimas esferas, aunque la participación activa no termina por cumplirse a cabalidad. Si bien en el proceso se reconoce a las y los ciudadanos la capacidad de configurar el diálogo sobre las políticas, las posibilidades de proponer alternativas son aún limitadas, así como los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas sobre el proceso.

Con todo, al ser un proceso complejo por los desafíos que tuvo que enfrentar, es necesario ahondar sobre ciertos aspectos críticos:

a. Finalidad

De acuerdo a José Antonio Guridi, el gobierno trabaja con el diagnóstico de que, al ser una materia que afecta transversalmente a la sociedad, la estrategia de IA debe ser multisectorial y abierta a la participación ciudadana. Asimismo, Demián Arancibia, del Mincienias, reconoce que el sello del gobierno ante esta política pública será la productividad.

Para muchos de los actores consultados, esto es algo contradictorio. Se apunta a que en el borrador de la estrategia hay un marcado acento económico-comercial y poca consideración a cuestiones más críticas aportadas por otros actores. Cabe entonces hacer la reflexión sobre la finalidad de la convocatoria: si estamos ante la idea de hacer una estrategia económica o una de carácter general. Si es el último caso, pareciera indispensable ajustar una metodología que permita integrar visiones críticas. que muchas veces se contraponen con la visión economicista.

b. Actores: diversidad y participación significativa

Esta estrategia muestra que en Chile se ha ido superando la tendencia a dividir a los actores participantes en políticas públicas solo entre el sector público y el privado (Lara & Viollier, 2017). Hay un reconocimiento de la variedad de actores interesados en participar de la política pública, pero aún hay muchos desafíos que considerar.

Abrir un proceso a la participación no significa que la diversidad de actores esté garantizada. Es necesario que los procesos de participación mantengan una mirada consciente a la diversidad de los actores que participan. Por ejemplo, en el caso del comité de expertos (que es de la poca información que está en la web de la estrategia) algunas de las fuentes entrevistadas apuntaron a la falta de equidad de género de sus miembros, la poca interdisciplinariedad de sus campos, la sobrerrepresentación del mundo académico y la nula participación de representantes de la sociedad civil. La falta de diversidad mermaría la confianza en los procesos y en sus resultados.

Por lo demás, tal como apuntan los directores del Núcleo [IA+SIC] de la Universidad de Chile al ser entrevistados, al ser una tecnología que afecta transversalmente deben generarse instancias y recursos para que comunidades que tradicionalmente han sido marginadas y que no participan de los circuitos de difusión de este tipo de iniciativas puedan participar del proceso.

En el caso chileno, la convocatoria llega a ser amplia, absolutamente abierta, sobre todo en las mesas autoconvocadas pero, hasta ahora, no hay registro público de la diversidad de sus participantes ni tampoco si hubo monitoreo de aquello en todo el proceso (sabemos por José Antonio Guridi que, al menos en el diseño original, sí se trató de tener equidad de género en el comité de expertos, pero se desequilibró por otras contingencias).

Además, es clave que se comprenda el distinto nivel de poder específico de los actores y de la posibilidad de recursos que tienen para estar en el proceso, pues eso influirá en el tipo y peso de participación que tengan. Por ejemplo, en el caso de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad en Chile, que también fue un proceso abierto y participativo, su consulta pública tuvo un 40% de participación del sector privado. A diferencia, por ejemplo, de un 16% de la sociedad civil y un 9% de la academia (Viollier, 2017).

Las razones de la disparidad de participación pueden ser muchas y, generalmente, se atribuyen al conocimiento técnico de los actores de determinados temas. Pero, en el caso de una temática con efectos reconocidamente transversales como lo advierte el propio gobierno y con un mapeo amplio de actores, es necesario dar una segunda mirada a las diferencias en participación. En este sentido, hay que darle consideración al poder y los recursos que algunos actores tienen y que hacen que terminen predominando en estos procesos. Muchos de ellos, no importa del sector de interés que provengan, tienen por ejemplo los recursos para destinar especialistas que participen de estos procesos, a diferencia de organizaciones más precarias.

En segundo lugar, el esfuerzo de convocar una diversidad de actores debe brindar mecanismos que hagan significativa su participación. Las personas que se deciden a participar quieren ser escuchadas y quieren saber por qué se toman o se desechan argumentos, de manera objetiva e informada. La omisión de estos mecanismos -tanto de transparencia como de rendición de cuentas- podría poner un manto de dudas en el proceso. Como apuntan los miembros de OPTIA en una entrevista para este reporte, la participación debe apuntar a una actitud de apertura y diálogo para evitar la percepción de la participación como un trámite realizado por cumplir una exigencia.

c. Transparencia y rendición de cuentas

Como reconoce la OCDE (2003), “[l]os poderes públicos tienen la obligación de rendir cuentas sobre el empleo que hacen de las contribuciones de los ciudadanos recibidas

mediante petición de reacciones, consulta pública y participación activa. Las medidas tendentes a garantizar que el proceso de elaboración de políticas sea abierto, transparente y susceptible de ser sometido al control y a la supervisión externos son decisivas para incrementar la responsabilización pública general” (p.13).

Consultado el gobierno, éste reconoce la transparencia del proceso como un desafío pendiente. Juan Antonio Guridi, quien en diciembre de 2020 dejó la coordinación de la estrategia, reconoce que su idea era, al final del proceso, disponer todos los documentos de manera anónima a través de un GitHub,⁵ de manera que la información quedara en un formato libre a disposición de cualquier investigador.

Efectivamente, más allá de habilitar un sitio web especial, la información que se conoce sobre el proceso y sus resultados es todavía muy limitada. Esta es una preocupación levantada transversalmente a las personas entrevistadas como una deuda clave del proceso. Esto hace poco factible la evaluación para agentes externos pero, principalmente, para que los mismos participantes del proceso puedan comprobar si su participación fue meramente simbólica o tuvo un efecto real. Con todo, como advierte Patricio Cofré de EY Chile, es necesario resguardar mecanismos de anonimato pues, por razones legítimas, muchas partes interesadas no querrían aparecer públicamente.

d. Aspectos metodológicos y formales

La reflexión metodológica es crucial y tiene múltiples aristas en el caso chileno. Por un lado, hay una demanda general de visibilizar los procesos y metodologías de análisis por los cuales se recogieron o excluyeron los aportes de las mesas autoconvocadas y de la consulta final. También se levantan dudas del porqué no hubo espacio para discutir y consensuar la estructura de la estrategia que, en esta ocasión, fue diseñada enteramente por el gobierno. La estructura del documento ordena la discusión e induce lo que es considerado importante, lo que quizás también debiese discutirse ampliamente (Derechos Digitales, 2021).

Asimismo, no existen razones metodológicas conocidas que justifiquen no someter a consulta pública el plan de acción. Aquello, además, parece contradictorio porque parte importante de las dudas que desató el borrador de la estrategia apuntan a la falta de una planificación concreta de esa estrategia, algo que debería estar cubierto por el plan de acción que, hasta el día del término de este reporte, no se conocía. Además, se agregan cuestionamientos a la metodología de las preguntas que se hicieron en la consulta pública (Derechos Digitales, 2021).

⁵ Plataforma creada para que los desarrolladores suban el código de sus herramientas y que cualquier usuario pueda descargarlas, pero también documentarse sobre ellas y colaborar con su desarrollo.

Los aspectos formales también deben tenerse en cuenta. Por ejemplo, se valora transversalmente la disponibilidad del gobierno a que se abriera a la posibilidad a la participación online y a la producción de material para apoyar a los participantes. No obstante, abrir la consulta pública con fechas muy difíciles de responder (entre las fiestas de fin de año) o la elección de la plataforma con todas sus limitaciones de formato se consideran barreras formales a la convocatoria.

e. Contenidos

Si bien este reporte se hace sin conocer el documento final de la estrategia de IA ni su plan de acción, es importante recoger que los contenidos del borrador presentan críticas en su fondo. De esas miradas críticas que se recogieron a través de posiciones publicadas por algunos participantes, como de nuestras entrevistas, parte importante de ellas apuntan a tres ejes:

- La falta de contextualización local del documento. Por ejemplo, la medida del éxito en muchos objetivos de la estrategia es alcanzar la media de la OCDE, algo considerado poco ajustado a la realidad chilena.
- El papel de la ética como forma de autoregulación y no como una práctica que complementa el marco regulatorio y el respeto a los derechos humanos. De hecho, varios actores sugieren que el componente normativo debiese ser un factor habilitante para el despliegue de proyectos que incluyan IA, algo que no ocurre en el borrador.
- La falta de acciones prioritarias claras y desarrolladas. Esto puede deberse a que el plan de acción no fue incluido junto al borrador de la estrategia, lo que para muchos hace que el documento carezca de información vital sobre objetivos, plazos y presupuestos.

f. La incertidumbre del futuro

El gran desafío es saber qué pasará con todo este proceso en los años venideros, lo que se demuestra en una incertidumbre generalizada en todos los actores entrevistados. Para muchos, el mismo hecho de que sea un proceso transversal, donde se logran acuerdos y consensos con distintos actores, debería ser un estímulo de continuidad para los próximos gobiernos. Pero muchos de ellos también dudan de que esta estrategia haya logrado los consensos necesarios.

Para Demián Arancibia, del Mincienias, la clave está en el trabajo político que se verá reflejado en el plan de acción de la estrategia, que viene precedido por muchos acuerdos políticos con diversidad de actores, que tienen como objetivo que la estrategia tenga una vida propia.

7. Conclusiones

El proceso chileno se caracteriza por su amplia flexibilidad al momento de adaptarse a las contingencias externas que tuvo que sortear. Logró avanzar desde un proceso de política pública más tradicional y dominado por la tecnocracia, a uno de más participación activa y amplia.

Con todo y quizás debido a que está marcado por responder a importantes contingencias externas, el proceso de diseño de la participación ciudadana carece de aspectos claves. Eso puede deslegitimar el proceso, siendo los más relevantes la diversidad e interdisciplinariedad de la participación, así como los mecanismos de transparencia activa que pongan a disposición de la ciudadanía información clave del proceso y que ayude a impulsar la rendición de cuentas de las autoridades ante la participación. Asimismo, preocupa transversalmente a los actores la continuidad de la estrategia en los próximos gobiernos, aunque se reconoce que la participación ampliada de actores y la construcción de consensos puede ser una clave fundamental para este desafío.

8. Recomendaciones

A la luz del proceso chileno para elaborar la estrategia nacional de Inteligencia Artificial, se recomienda:

- a) **Contar con el compromiso político y presupuestario acorde al nivel de participación que se quiere implementar.** El compromiso de las autoridades con la participación brinda un nivel de legitimidad que permite diseñar el proceso, comprometerse con tiempos más largos y con procesos quizás más caros, pero que permiten la construcción de consensos amplios y significativos.
- b) **Mapear múltiples actores interesados.** Al ser la Inteligencia Artificial una tecnología que puede afectar transversalmente a la sociedad, es importante que los tomadores de decisiones de política pública hagan un mapa de quiénes son las posibles múltiples partes interesadas en el tema (incluidos los propios servicios del Estado) y su posibilidad de comprometerse en los diferentes niveles del proceso. Es importante salir de la zona de confort y buscar actores, si es que no se conocen, teniendo en cuenta valores como la diversidad y la interdisciplinariedad. Contar con estrategias diferenciadas que faciliten su compromiso con el proyecto no solo puede asegurar una transversalidad en la participación sino también otorga legitimidad al proceso en tanto se ve que hay un compromiso por parte de las autoridades.

- c) **Diseñar, consultar y publicar la metodología de participación.** El diseño del proceso de participación puede ser pensado por el tomador de decisión como también puede ser acordado de manera colectiva. En todas las opciones, parece importante abrir una consulta sobre el diseño mismo, que no solo informe a los ciudadanos sino que ayude a mejorar aspectos que han pasado desapercibidos por los tomadores de decisiones. Es también clave la transparencia en los criterios aplicados para tomar o desechar retroalimentaciones.
- d) **Monitorear el proceso y ser flexibles.** Como demuestra el caso chileno, es importante monitorear el proceso en, al menos, dos aspectos: por un lado, el contexto político en el que se desarrolla el proceso pues puede afectar al desarrollo de políticas públicas participativas. Por otro, es importante conocer los participantes, tener indicadores de sus inquietudes y actuar sobre los resultados, informándolos adecuadamente.
- e) **Facilitar las vías de participación.** Crear una diversidad de instancias para recoger la retroalimentación es una buena opción para implementar. Asimismo, experiencias como los webinars informativos en Chile son una buena opción para fomentar la discusión y, posteriormente, la participación directa en el proceso.
- f) **Habilitar mecanismos de transparencia.** La otra cara de la participación es la transparencia. Se deben diseñar mecanismos de transparencia activa apenas se comprenda la necesidad de hacer una política pública con participación ciudadana. Eso implica que, desde el inicio, los coordinadores del proceso ajusten procesos de transparencia como la autorización de los participantes para la publicación de sus retroalimentaciones, ajustar mecanismos de anonimato cuando corresponda y publicar toda información que sea relevante para la información de los participantes, desde los diagnósticos como la documentación técnica. El principio de transparencia debe ser un valor continuo en el proceso de participación y no solo un agregado al final del proceso, pues su valor social a esas alturas no es el mismo.
- g) **Continuidad de la política o estrategia en el tiempo.** Hacer una política pública participativa es difícil y toma tiempo, pero deberían privilegiarse metodologías transparentes que ayuden a la construcción de consensos. Los consensos permiten la construcción de continuidades, a pesar de los cambios de gobiernos y que los cambios sean más bien ajustes a los acuerdos generales.
- h) **Evaluar el proceso y sus resultados.** Como dice la OCDE (2003), los poderes públicos necesitan evaluar sus resultados en materia de información, consulta e implicación de los ciudadanos, a fin de poder adaptarse a nuevas exigencias y al cambio de condiciones en la elaboración de las políticas públicas. Más aún, en el caso de países como Chile, donde el trabajo en políticas públicas con diverso nivel de participación respecto a cuestiones tecnológicas tiene una experiencia extensa

(estrategias digitales participativas en diversos periodos presidenciales, la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, etcétera). Es necesario relevar las metodologías que se han usado y evaluar sus fortalezas y debilidades, de manera de construir las nuevas políticas en base a la evidencia.

Referencias bibliográficas

- CNID (2019). CIENCIA, TECNOLOGÍA, CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN PARA CHILE. Disponible en: https://www.cnid.cl/wp-content/uploads/2019/12/CTCI-para-Chile-y-Contexto-para-la-reflexion_web.pdf
- Comisión Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación (2019). Inteligencia Artificial para Chile: La urgencia de desarrollar una estrategia. Disponible en: https://eia.bcn.cl/images/c/c1/Inteligencia_Artificial_para_Chile.pdf
- Derechos Digitales (2021). Consideraciones críticas sobre el borrador de la Política Nacional de Inteligencia Artificial. Disponible en: <https://www.derechosdigitales.org/publicaciones/consideraciones-criticas-sobre-el-borrador-de-la-politica-nacional-de-inteligencia-artificial-de-chile/>
- García, V (2021). Las horas críticas de Sebastián Piñera: abandonos, baja popularidad y un país que sigue polarizado. La Nación. Disponible en: <https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/las-horas-criticas-de-sebastian-pinera-abandonos-baja-popularidad-y-un-pais-que-sigue-polarizado-nid02052021/>
- Gob.cl (2019). Gobierno anuncia Plan de Trabajo de Inteligencia Artificial a cargo del Ministerio de Ciencia. Disponible en: <https://www.gob.cl/noticias/gobierno-anuncia-plan-de-trabajo-de-inteligencia-artificial/>
- Lara, JC. & Viollier, P. (2017). Mapping the Cyber Policy Landscape: Chile. Global Partners Digital. Disponible en: https://www.gp-digital.org/wp-content/uploads/2017/02/mappingthecyberlandscape_chile.pdf
- León, P (2019). Alerta Infancia: el software que expone los datos personales de niños y niñas en riesgo social. Radio Universidad de Chile. Disponible en: <https://radio.uchile.cl/2019/01/29/alerta-infancia-el-software-que-expone-los-datos-personales-de-ninos-y-ninas-en-riesgo-social/>
- OCDE (2003). Resumen. Un gobierno abierto: fomentar el diálogo con la sociedad civil. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Disponible en: <https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264019959-sum-es.pdf?expires=1618341698&id=id&accname=guest&checksum=5E1CBCD72DE606AA308B83D6056C65D8>

OECD (2019). Recommendation of the Council on Artificial Intelligence. OECD Legal Instruments. Disponible en: <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449#adherents>

Sanhueza, C. (2019). "No lo vimos venir". Los expertos bajo escrutinio. En Chile despertó. Lecturas desde la Historia del estallido social de octubre. Varios autores. Universidad de Chile. Disponible en: https://www.uchile.cl/documentos/descarga-el-libro-chile-desperto-lecturas-desde-la-historia-del-estallido-social-de-octubre-pdf-58-mb_161019_0_0723.pdf

Viollier, P. (2017). La participación en la elaboración de la política nacional de ciberseguridad: hacia un nuevo marco normativo en Chile. Derechos Digitales. Disponible en: <https://www.derechosdigitales.org/wp-content/uploads/ciberseguridad.pdf>

Yáñez, C. 2019. ¿Por qué la Inteligencia Artificial debe ser un tema país? Científicos y gobierno preparan plan estratégico. La Tercera. Disponible en: <https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/inteligencia-artificial-cientificos-gobierno/797860/>